



**UNIDAD DE ARBITRAJE
ESTUDIO LOPEZ & VERDE ABOGADOS EIRL**

Caso Arbitral CA 002-2020

Soluciones Integrales L&J S.A.C

Contra

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones - Junín

LAUDO

Árbitro Único

Miguel Ángel Santa Cruz Vital

Secretario Arbitral

Halley Lopez Zaldívar

Huancayo, 6 de mayo de 2021.



ÍNDICE

I. Antecedentes	3
Convenio Arbitral.....	3
Instalación	3
Normatividad aplicable	4
Principales Actuaciones Procesales	4
Hechos del Caso	6
Posiciones de las Partes	7
De la Demanda.....	7
De la Contestación de la Demanda	10
II. Considerando	11
Cuestiones Preliminares	11
Primer punto controvertido y accesorio	13
Segundo punto controvertido y accesorio	24
Tercer punto controvertido.....	25
Cuarto punto controvertido.....	26
III. Decisión	26



Orden Procesal N° 15

En Huancayo, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, el Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, de haber escuchado los argumentos sometidos a su consideración y de haber analizado las pretensiones planteadas en la demanda y contestación de la demanda, dicta el siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada.

I. Antecedentes

Convenio Arbitral

1. El 29 de abril de 2020, SOLUCIONES INTEGRALES L & J S.A.C. (en adelante, CONTRATISTA) y la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (en adelante, ENTIDAD) suscribieron el Contrato No. 001-2020-GRJ-DRTC/DR, en cuya cláusula décimo séptima se encuentra el convenio arbitral que establece que las controversias, sobre nulidad, que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante arbitraje.

Instalación

2. Mediante las Cartas Nos. 007-2020-CA-002-2020 Y 008-2020-CA-002-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, notificada a las partes el 21 del mismo mes y año, , se comunicó la aceptación del Árbitro Único, así como la inexistencia de impedimento, incompatibilidad o compromiso que imposibilite asumir el cargo, obligándose a desempeñar con imparcialidad, probidad e independencia la labor encomendada, conforme a lo dispuesto en las normas procesales y éticas de la Unidad de Arbitraje del Estudio López & Verde Abogados (en adelante, la INSTITUCIÓN ARBITRAL).



Normatividad aplicable

3. Para resolver el fondo de la controversia, considerando la fecha en la que inició el proceso de contratación, es de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No. 30225 y modificada por el Decreto Legislativo No. 1444 (en adelante, LEY), cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo No. 082-2019-EF. Asimismo, es de aplicación el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, REGLAMENTO), aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.

Principales Actuaciones Procesales

4. Con fecha 29 de octubre de 2020, mediante Orden Procesal No. 1, se determinan las reglas y costos del proceso.
5. Con fecha 13 de noviembre de 2020, mediante la Orden Procesal No. 2, se declaró fundada la reconsideración formulada por la ENTIDAD, disponiéndose la ampliación de todos los actos postulatorios.
6. Con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante Orden Procesal No. 3, se admitió a trámite la demanda, se corrió traslado de la misma a la ENTIDAD, se otorgó a las partes un plazo adicional para el pago de los costos y arbitrales, y se dio conocimiento al Contratista del escrito presentado por la Entidad el 26 de noviembre de 2020.
7. Con fecha 30 de diciembre de 2020, mediante Orden Procesal No. 4, se admitió a trámite la contestación de la demanda y se facultó al Contratista al pago de los costos arbitrales no asumidos por la Entidad.
8. Con fecha 7 de enero de 2021, mediante Orden Procesal No. 5, se fijaron los puntos controvertidos bajo la siguiente fórmula:
 - Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJDRTC/DR del 29 de mayo de 2020.
 - Accesoriamente, determinar si corresponde o no se disponga la restitución de la eficacia de los Contratos No. 01-2020-GRJ-DRTC-DR y No. 02-2020-GRJ-DRTC-DR



- Determinar si corresponde ordenar la ampliación de plazo para la presentación de la conformidad del servicio.
 - Accesoriamente, determinar si corresponde o no ordenar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín el pago a favor de Soluciones Integrales L&J S.A.C. de los gastos generales, los mismos que serán calculados en la culminación del servicio.
 - Determinar si corresponde o no ordenar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín el pago a favor de Soluciones Integrales L&J S.A.C. de una indemnización por daños y perjuicios por la suma de S/50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 Soles).
 - Determinar a quien corresponde asumir el pago y/o reembolso de los costos arbitrales generados en el presente proceso.
9. Asimismo, mediante la misma Orden Procesal No. 5, se admitieron los medios de prueba ofrecidos, se prescindió de la actuación de los medios de prueba, en razón que todos ellos tienen naturaleza documental, se otorgó un plazo a las partes para que ofrezcan sus alegaciones y conclusiones finales, se declaró fundado el fraccionamiento solicitado por el Contratista, y se tuvo presente lo señalado en el otrosí digo del escrito presentado por el Contratista.
10. Con fecha 21 de enero de 2021, mediante Orden Procesal No. 6, se citó a las partes a audiencia a las 10:00 horas del 5 de febrero de 2021 y se trasladaron los escritos presentados a las respectivas contrapartes.
11. Con fecha 29 de enero de 2021, mediante la Orden Procesal No. 7, se reprogramó la audiencia, a las 10:00 horas del 12 de febrero de 2021 y se tuvieron por pagados los costos del arbitraje, en subrogación, por el CONTRATISTA.
12. Con fecha 2 de marzo de 2021, mediante la Orden Procesal No. 10, se rectificó la Orden Procesal No. 9 respecto al correo electrónico de la ENTIDAD, se tuvo presente lo señalado en el considerando 2 de dicha providencia, se dispuso la notificación de las ulteriores notificaciones al correo electrónico señalado por la ENTIDAD y se reprogramó la audiencia para el 12 de marzo de 2021, a las 10:00 horas.



13. Con fecha 15 de marzo de 2021, mediante Orden Procesal No. 11, se trasladó al Contratista el escrito presentado por la ENTIDAD el 12 de marzo de 2021.
14. Con fecha 27 de marzo de 2021, mediante Orden Procesal No. 12, se tuvo presente el escrito presentado por el Contratista el 26 de marzo de 2021, se dio conocimiento al Contratista del escrito presentado por la ENTIDAD el 25 de marzo de 2021, se dispuso el cierre de la etapa probatoria y se fijó el plazo para laudar.

Hechos del Caso

15. En el presente acápite se describen los hechos del caso que van desde los antecedentes del contrato materia de litigio, pasando por la ejecución del mismo hasta las controversias originadas a partir de ello. Estos hechos han sido elaborados teniendo en cuenta los documentos presentados por las partes, así como lo alegado por estas a lo largo del proceso. Se deja claramente señalado que su inclusión en esta sección no significa el reconocimiento de la veracidad de los hechos reseñados.
16. Con fecha 29 de abril de 2020 las partes suscriben el Contrato No. 001-2020-GRJ-DRTC/DR, para el "Servicio de personal para fiscalización e inspección de vehículos en la región Junín, (camiones de carga, vehículos policiales, ambulancias y otros vehículos autorizados) durante las 24 horas en diez (10) días calendarios, comprendidos del 27 de marzo al 12 de abril del 2020, incluidos viáticos, materiales e instrumentos necesarios, implementos de seguridad necesarios contra la pandemia del covid-19, en los lugares correspondientes a las fronteras ubicadas en la provincia de La Oroya - Junín, Palián - Huacrapuquio, Chanchamayo - Chupaca Yauyos" (en adelante, el CONTRATO No. 01).
17. Con fecha 11 de mayo de 2020 las partes suscriben el Contrato No. 002-2020-GRJ-DRTC/DR, para el "Servicio de personal por ampliación del estado de emergencia para fiscalización e inspección de vehículos en la región Junín, (camiones de carga, vehículos policiales, ambulancias y otros vehículos autorizados) durante las 24 horas en diez (10) días calendarios, comprendidos del 13 de abril al 10 de mayo del 2020, incluidos viáticos, materiales e instrumentos necesarios, implementos de seguridad necesarios contra la



pandemia del covid-19, en los lugares correspondientes a las fronteras ubicadas en la provincia de La Oroya - Junín, Palián - Huacrapuquio, Chanchamayo - Chupaca Yauyos" (en adelante, el CONTRATO N° 02).

18. Con fecha 13 de mayo de 2020, mediante Carta No. 013-2020/DRTCJ/AASA, la ENTIDAD requiere al CONTRATISTA la presentación del documento que acredite su inscripción al Registro Nacional de empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral (en adelante, RENEEL).
19. Con fecha 2 de julio de 2020, mediante Carta No. 010-2020-DRTCJ/OGA/AASA, se remite la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR, por la cual se declara la nulidad de oficio de los CONTRATOS No. 01 y 02.
20. Con fecha 16 de febrero de 2021, mediante Reporte No. 45-2021-GRJ-DRTC/DR, la Dirección Regional de la Entidad comunica a la Procuraduría Pública el Informe Técnico Legal No. 01-2021-GRJ-DRTC-OGAL, el Informe Técnico No. 02-2021-GRJ-DRTC-OGA-AASA, el Informe Técnico Legal No. 03-2020-GRJ-DRTC-OGAL, el Informe Técnico No. 26-2020-GRJ-DRTC-OGA-AASA, el Informe Legal No. 163-2020-GRJ-DRTC/OGAL, el Informe Técnico No. 15-2020-GRJ-DRTC-OGA-AASA señalando la omisión en la documentación requerida al CONTRATISTA.

Posiciones de las Partes

De la Demanda

21. Mediante el escrito de fecha 26 de noviembre de 2020, el CONTRATISTA presentó su demanda arbitral, con las siguientes pretensiones:

Primera pretensión principal: Declare la nulidad en todos sus extremos de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR, de fecha 29 de mayo de 2020.

Pretensión subordinada: Ordene la restitución de los efectos jurídicos de los contratos:



- 01-2020-GRJ-DRTC-DR respecto al “servicio de personal para fiscalización e inspección de vehículos en la región Junín, (camiones de carga, vehículos policiales, ambulancias y otros vehículos autorizados) durante las 24 horas en diez (10) días calendarios, comprendidos del 27 de marzo al 12 de abril del 2020, incluidos viáticos, materiales e instrumentos necesarios, implementos de seguridad necesarios contra la pandemia del Covid-19, en los lugares correspondientes a las fronteras ubicadas en la provincia de la Oroya - Junín, Palian - Huacrapuqui, Chanchamayo – Chupaca Yauyos”, de fecha 29 de abril de 2020.
- 02-2020-GRJ-DRTC-DR respecto al “servicio de personal por ampliación del estado de emergencia para fiscalización e inspección de vehículos en la región Junín, (camiones de carga, vehículos policiales, ambulancias y otros vehículos autorizados) durante las 24 horas en diez (10) días calendarios, comprendidos del 13 de abril al 10 de mayo de 2020, incluidos viáticos, materiales e instrumentos necesarios, implementos de seguridad necesarios contra la pandemia del Covid-19, en los lugares correspondientes a las fronteras ubicadas en la provincia de la Oroya – Junín, Palian – Huacrapuqui, Chanchamayo – Chupaca Yauyos”, de fecha 11 de mayo de 2020.

Pretensión accesoria: Ordene a la ENTIDAD la ampliación de plazo para la presentación de la conformidad del servicio, así como el reconocimiento de gastos generales, los mismos que serán calculados en la liquidación del servicio.

Segunda pretensión principal: Condenase al pago de indemnización por daños y perjuicios por la responsabilidad contractual ascendente a la suma de S/. 50,000 (cincuenta mil con 00/100 soles).

Tercera pretensión principal: Condene a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín a asumir los costos del proceso arbitral los cuales deberán incluir, además, los honorarios profesionales de nuestros abogados en razón de S/. 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles).



22. Sobre la nulidad de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR, el CONTRATISTA indica que este no reúne todos los requisitos de validez de los actos administrativos, establecidos en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General; ya que, no cumple con el procedimiento regular al haberse dado un plazo de un día al CONTRATISTA, mediante la Carta No. 13-2020-DRTC-AASA de fecha 13 de mayo de 2020, cuando el numeral 3 del artículo 145 del REGLAMENTO establece que la entidad deberá correr traslado al contratista a efectos de que se pronuncie en un plazo máximo de cinco días respecto a los posibles vicios de los CONTRATOS Nos. 01 y 02.
23. Asimismo, el CONTRATISTA señala que la obligación de presentar la constancia de inscripción en el RENEEL no se encuentra contemplado en las Bases Integradas o Términos de Referencia correspondientes a la contratación.
24. Por otro lado, el CONTRATISTA refiere que se cumple con todos los requisitos señalados en el literal d) del artículo 44 de la LEY porque la contratación se dio en Estado de Emergencia, aprobada con la Resolución Directoral No. 395-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 5 de mayo de 2020, y esta se desarrolló de forma transparente, cumpliendo requisitos y procedimientos establecidos por ley.
25. Sobre la pretensión subordinada, el CONTRATISTA considera que, al haber demostrado la falta de observancia de los requisitos de validez de la Ley de Procedimiento Administrativo General y la inexistencia de la causal invocada, para la declaración de nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, corresponde restituir los efectos jurídicos de estos.
26. Respecto a la pretensión accesoria, el CONTRATISTA señala que la nulidad de los contratos se interrumpió injustificadamente el plazo de ejecución; por lo tanto, corresponde que se amplíe el plazo contractual, según el numeral 5 del artículo 158 del REGLAMENTO, a efectos de presentar el expediente de conformidad y demás documentos para el pago, así como se le reconozca los gastos generales, derivados de la ampliación.
27. A consideración del CONTRATISTA, corresponde que la ENTIDAD pague una indemnización por daños y perjuicios debido a que ha sufrido un menoscabo en sus bienes por la emisión ilegal de la



declaración de nulidad realizada a través de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR.

28. Por último, sobre los costos arbitrales, según el CONTRATISTA, estos deben ser de cargo de la ENTIDAD por cuanto los hechos que generaron la controversia son producto de la negligencia de esta.

De la Contestación de la Demanda

29. Mediante el escrito de fecha 23 de diciembre de 2020, la ENTIDAD contestó a la demanda presentada por el CONTRATISTA.
30. Sobre la primera pretensión, la ENTIDAD indica que la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR motiva correctamente la decisión de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, según el literal d) del artículo 44 de la LEY, toda vez que se dio la nulidad de los procesos debido a la no presentación de la constancia de inscripción del CONTRATISTA en el RENEEL, el cual es un documento necesario para prestar el servicio.
31. Asimismo, la ENTIDAD señala que dicho documento fue requerido a través de la Carta No. 13-2020-DRTC-AASA, de fecha 13 de mayo de 2020, otorgando un (1) día hábil para que el CONTRATISTA cumpla con su remisión.
32. Respecto a la pretensión subordinada, la ENTIDAD refiere que no corresponde la restitución de efectos jurídicos de los CONTRATOS Nos. 01 y 02 por cuanto se fundamentó correctamente la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR.
33. Acerca de la pretensión accesorio, a consideración de la ENTIDAD, no existe una relación contractual válida, por la declaración de nulidad, para que se generen efectos económicos.
34. Sobre la segunda pretensión principal, la ENTIDAD hace énfasis en que el CONTRATISTA no ha indicado cuál es la conducta generadora del daño ni algún otro elemento de la responsabilidad civil.
35. Por último, respecto de la tercera pretensión principal, según la ENTIDAD, no se ha pactado que los costos del arbitraje sean de cargo de la parte vencida y que para requerir que los costos del



proceso sean de la ENTIDAD, el CONTRATISTA debe demostrar la ilegalidad de la declaración de nulidad de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJ-DRTC/DR; sin embargo, no podrá hacerlo porque la transgresión del principio de presunción de veracidad del CONTRATISTA es evidente.

II. Considerando

Cuestiones Preliminares

36. Antes de pasar al análisis y pronunciamiento sobre las materias objeto de controversia sometidas al presente arbitraje, el Árbitro Único declara que:

- Las partes ratificaron su total conformidad en la designación del árbitro único Miguel Ángel Santa Cruz Vital, quien, a su vez, manifestó no tener incompatibilidad ni compromiso con las partes, habiendo desempeñado el cargo con imparcialidad, independencia, neutralidad y objetividad.
- El Árbitro Único no ha sido recusado.
- Durante el desarrollo del proceso arbitral, ambas partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, argumentar sus posiciones e informar oralmente, desarrollándose las actuaciones arbitrales respetando las garantías de audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las partes. Asimismo, se ha cumplido debidamente con notificar cada una de las actuaciones procesales a ambas partes, tal y como consta de los cargos de notificación que obran en el presente expediente arbitral.

37. Asimismo, antes de desarrollar los puntos controvertidos, este Árbitro Único considera pertinente señalar lo siguiente:

- Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en los Antecedentes, en concordancia con la información que obra en los actuados del proceso, así como



los que se mencionan en los demás acápite del presente Laudo.

- Este Árbitro Único, conforme lo establecido en el Artículo 139° numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.
- En el análisis de las pretensiones, el Árbitro Único se ha reservado el derecho de seguir el orden que estima más conveniente para la solución de las controversias contenidas en los puntos controvertidos del presente caso arbitral.
- El Árbitro Único está procediendo a emitir el laudo dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.
- El presente Laudo Arbitral resolverá los puntos controvertidos del presente proceso, los cuales fueron determinados a partir de las pretensiones formuladas en la demanda arbitral presentada por el CONTRATISTA.
- Así, el Árbitro Único declara haber revisado todos y cada uno de los escritos presentados por las partes, así como los medios probatorios que resultan pertinentes para emitir el presente Laudo, analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, aun cuando en el Laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.
- En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las partes, el Árbitro Único deja expresa constancia de que en el presente arbitraje se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43° de la LEY DE ARBITRAJE, en el que se señala que:

“El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la



presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios”.

38. En consecuencia, no existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso arbitral, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Árbitro Único emite el Laudo de Derecho correspondiente.

Primer punto controvertido y accesorio

Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 0400-2020-GRJDRTC/DR del 29 de mayo de 2020.

Accesoriamente, determinar si corresponde o no se disponga la restitución de la eficacia de los contratos N° 01-2020-GRJ-DRTC-DR y N° 02-2020-GRJ-DRTC-DR.

39. Así tenemos que la declaración de nulidad del contrato se encuentra regulada en el artículo 44 de la LEY, el cual en su numeral 2 establece lo siguiente:

“ (...)

Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

- a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.*
- b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo.*
- c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación.*
- d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando*



no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto del que corresponde.

- e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dación o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.*
- f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dación o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.*
- g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera”*

40. Asimismo, en el artículo 145 del REGLAMENTO, sobre la nulidad del contrato, establece lo siguiente:

“Artículo 145. Nulidad del Contrato

145.1 Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje.

145.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167.



145.3. Cuando la Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles."

41. Así las cosas, se tiene que para que la ENTIDAD declare la nulidad de los contratos celebrados la causal de resolución debe estar enmarcado en una de las siete (7) causales señaladas en el literal 2 del artículo 44 de la LEY y deberá seguir el procedimiento establecido por el artículo 145 del REGLAMENTO el cual consiste en los siguientes pasos:
1. Cuando advierta un posible vicio de nulidad, deberá comunicar al CONTRATISTA.
 2. Otorgar un plazo máximo de cinco (5) días para que el CONTRATISTA se pronuncie.
 3. Notificar notarialmente al CONTRATISTA con la resolución que declara la nulidad del contrato.
42. A través la Resolución Directoral No. 400-2020-GRJ-DRTC, de fecha 29 de mayo de 2020, la ENTIDAD declara la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, citando como causal el literal d del artículo 44 de la LEY.

Que, Después de celebrados los Contratos, la Entidad puede declarar la Nulidad de Oficio en los siguientes casos: a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11º de la presente ley, Los Contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación, d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa, Cuando no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente ley, pese a que las contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación, o cuando se emplee un método de contratación distinto del que corresponde.

43. El literal d del artículo 44 de la LEY no solamente hace referencia al literal b del artículo 100 del REGLAMENTO, en el que se establecen



las condiciones que habilitan a la ENTIDAD para realizar una contratación directa. A saber:

"b) Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad.

b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado.

b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente.

b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo



plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales.

Realizada la Contratación Directa, la Entidad contrata lo demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa”

44. Cuando en el literal d del artículo 44 de la LEY dice “*condiciones y/o requisitos establecidos por la normativa*”, se debe entender que hace referencia a todas las condiciones o requisitos que establezcan las normas relevantes para realizarse la contratación.
45. Así las cosas, en atención a la naturaleza del servicio contratado, se debe precisar que el CONTRATISTA, es una empresa dedicada a la intermediación laboral. Este último es un mecanismo de contratación indirecta mediante el cual un tercero destaca mano de obra a una empresa usuaria para que preste servicios bajo dirección y fiscalización de esta última. Por tanto, se tiene que una de las normas relevantes para la contratación en el presente proceso, es la Ley No. 27626, “*Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores*”.
46. Habiendo establecido la importancia de la Ley No. 27626, es preciso tener en cuenta que en los artículos 10 y 13 de dicha norma se establece quienes están obligados, así como la obligatoriedad de la inscripción en RENEIL.

“Artículo 10.- Obligados a inscribirse en el Registro

Se consideran empresas y entidades obligadas a inscribirse en el Registro a:

1. Las empresas especiales de servicios, sean éstas de servicios temporales, complementarios o especializados;



2. Las cooperativas de trabajadores, sean éstas de trabajo temporal o de trabajo y fomento del empleo; y,
3. Otras señaladas por norma posterior, con sujeción a la presente Ley.

Para efectos de la presente norma, las empresas y entidades antes señaladas se denominarán "entidades".

"Artículo 13.- Obligatoriedad de la inscripción en el Registro

La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades de las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley.

Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro.

La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades."

47. Asimismo, en la ley ya antes mencionada, específicamente en su artículo 26, se establece que las empresas usuarias del servicio de las empresas de intermediación laboral se encuentran obligadas a solicitar la constancia de inscripción de esta última, bajo sanción de la Autoridad Administrativa de Trabajo. A saber:

"Artículo 26.- Obligaciones de las empresas usuarias

26.1 Las empresas usuarias que contraten con una entidad se encuentran obligadas a solicitar la constancia de inscripción vigente de ésta, debiendo retener en su poder copia de la misma durante el tiempo de duración del contrato que las vincule.

En caso de que operen con sucursales, oficinas, centros de trabajo o en general cualquier otro establecimiento de la entidad, la empresa usuaria además deberá requerir copia de la comunicación a la cual se refiere el artículo siguiente.



26.2 En el contrato de locación de servicios que celebren las empresas de servicios o cooperativas con las empresas usuarias se incluirán las siguientes cláusulas:

a) Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria.

b) Términos del contrato del personal destacado.

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por Reglamento se establecerá el grado de las infracciones, a efectos de calificarlas dentro de la escala establecida por el Decreto Legislativo N° 910."

48. Siendo ello así, es obligación de la ENTIDAD, como empresa usuaria, a efectos de validar la relación contractual con el CONTRATISTA, observar las condiciones y/o requisitos establecidos en la ley No. 27626.

49. Sobre este particular, el CONTRATISTA, en la Audiencia Única de fecha 12 de marzo de 2021, declaró no contar con el certificado de inscripción en el RENEIL. En efecto, a partir del minuto 40:48 de la grabación de la Audiencia Única, se puede apreciar la declaración del CONTRATISTA, en respuesta a las preguntas del Árbitro Único. Se procede a transcribir dicho fragmento de la audiencia:

"Árbitro Único: ¿La empresa cuenta con este certificado?"

Contratista: Contábamos con el certificado y ahorita estamos en un proceso de (inaudible) ante el Ministerio de Trabajo.

Árbitro Único: Y ahora están ... no lo escuché se perdió.

Contratista: Nosotros, para aquel entonces, no contábamos con el certificado; sin embargo, hasta la fecha por unos temas burocráticos se está demorando para que nos puedan emitir el certificado."



50. Queda meridianamente claro que el CONTRATISTA, hasta la fecha, no cuenta con la constancia de inscripción en el RENEEL. En consecuencia, dado que hasta la fecha aún no forma parte de dicho registro, hace que no se tengan todas las condiciones y/o requisitos para que se lleve a cabo la contratación directa del CONTRATISTA, lo cual genera el supuesto de nulidad de contrato del literal d del artículo 44 de la LEY.
51. Ahora bien, habiendo establecido que sí se configura el supuesto para la nulidad establecido en el literal d del artículo 44 de la LEY, corresponde examinar si se cumplió con el procedimiento establecido por el artículo 145 del REGLAMENTO, para declarar la nulidad del contrato.
52. De la Carta No. 013-2020-DRTC-AASA se puede apreciar que, una vez advertida la supuesta nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, la ENTIDAD procedió a comunicar la misma al CONTRATISTA el día 13 de mayo de 2020.

<i>Huancayo, 13 de mayo del 2020</i>	
<u>CARTA N° 013 - 2020-DRTC-AASA</u>	
Señores:	
SOLUCIONES INTEGRALES L&J SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-SOLINT L&J SAC	
Presente -	
ASUNTO	SOLICITO SUBSANCIÓN DE DOCUMENTO
REFERENCIA	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01-2020-GRA-DRTC CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02-2020-GRA-DRTC

53. Asimismo, también se puede apreciar que, a través de dicha carta la ENTIDAD otorgó el plazo de un (1) día hábil al CONTRATISTA para que presente la constancia de inscripción en el RENEEL.



De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que el responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado constató que su empresa no presentó un documento esencial para realizar la prestación del servicio, que es el REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABOAL, requisito establecido en concordancia con el Art. 11 de la Ley N° 27626 en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa.

Por tanto, se le solicita subsanar la observación con pronta y no plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, la misma que deberá ser presentada en una carta al área de planeamiento y desarrollo institucional.

Sin otro por ahora, saluda,

54. Sobre el plazo otorgado por la ENTIDAD, el CONTRATISTA considera que, para seguir el procedimiento establecido por la normativa, se debió otorgar un plazo de cinco (5) días hábiles. Sin embargo, de la lectura del artículo 145 del REGLAMENTO se comprende que este no determina un mínimo de días hábiles sino un **máximo** y que deja a completa discreción de la ENTIDAD determinar cuántos días de plazo se otorgarán, mientras no sobrepase los cinco (5) días hábiles; por tanto, el plazo de un día hábil otorgado por la ENTIDAD, ha sido concedido conforme a la regulación.
55. Por otro lado, se observa que la Carta No. 010-2020-DRTCJ/OGA/AASA, de fecha 25 de junio de 2020, mediante el cual se puso en conocimiento al CONTRATISTA de la Resolución Directoral No. 400-2020-GRJ-DRTC, con la que se declaraba la nulidad de los CONTRATOS No. 01 y No. 02, fue notificada usando la vía notarial que requiere el artículo 145 del REGLAMENTO.



ANEXO T-E

200.41200069

200.4390011

NOTARÍA VENERO BOCANGEL
Jr. Moquegua 206 Esq. con Calle C
Huancayo Junín - Perú
Telefax 218564

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Chilca, 25 de junio del 2020.

CARTA N° 010 -2020-DRTCJ/OGA/AASA

Señores:
SOLUCIONES INTEGRALES L&J SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SOLINT L&J
ALM. ARTEMIO OCAÑA N° 162 DPTO 103 CJHAB TORRES DE SAN BORJA-LIMA

Huancayo. -

Asunto: **NOTIFICAR LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 400-2020-GRJ-DRTC/DR.**

Referencia: **Contrato N° 001-2020-GRJ-DRTC**
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2020-GRJ-DRTC
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2020-GRJ-DRTC

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARIA

29

56. Por tanto, de lo expuesto anteriormente se tiene que en efecto la ENTIDAD cumplió con el procedimiento establecido por la normativa para declarar la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02.
57. En conclusión, de todo lo expuesto, el Árbitro Único determina que i) la ENTIDAD invocó correctamente la causal del literal d del artículo 44 de la LEY y ii) la ENTIDAD cumplió con el procedimiento establecido por artículo 145 del REGLAMENTO para declarar la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02.
58. Sin perjuicio de ello, el Árbitro Único procede a pronunciarse sobre dos argumentos expuestos por el CONTRATISTA.
59. El CONTRATISTA argumenta que la presentación de la constancia de inscripción en el RENEEIL no se encontraba comprendido en los Términos de Referencia y; por tanto, la presentación de la constancia de inscripción no era una obligación del CONTRATISTA.
60. Sobre ello, cabe precisar que la obligación del CONTRATISTA de formar parte del RENEEIL, aun en el supuesto que no se hubiera



establecido como requisito de la contratación, para este Árbitro Único ello no determina la inexistencia de la obligación legal del CONTRATISTA de formar parte del RENNEEIL, así como la obligación de la ENTIDAD, como empresa usuraria, de requerirla.

61. El CONTRATISTA tampoco puede argumentar el desconocimiento de dicha obligación por cuanto toda norma emitida por el Estado se presume conocida después de su publicación.
62. Por otro lado, el CONTRATISTA argumenta que, según el literal 4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia No. 025-2020, se contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles para la regulación. Procedemos a transcribir el literal citado para un mejor análisis:

“Dispóngase que para las contrataciones de bienes y servicios que realicen las entidades en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, para alcanzar el objetivo del presente Decreto de Urgencia, la regularización se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento.”

63. Respecto a ello, es preciso mencionar que el artículo antes transcrito amplía el plazo de la ENTIDAD para regularizar; sin embargo, este es un plazo otorgado a la ENTIDAD para realizar un proceso, pudiendo esta, a su criterio, iniciar la regularización desde el día que se inició el servicio, tal como estipula el penúltimo párrafo del artículo 100 del reglamento. A saber:

“En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad



regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales”

64. Asimismo, también se debe considerar que ha pasado más de un año desde el requerimiento realizado por la ENTIDAD, a través de la Carta No. 013-2020-DRTC-AASA, y el CONTRATISTA aún no se encuentra inscrito en RENEIL, tal y como la propia parte, dejó constancia en la Audiencia del 12 de marzo de 2021.
65. Por tanto, los argumentos expuestos por el CONTRATISTA no pueden desvirtuar que i) la ENTIDAD invocó correctamente la causal del literal d del artículo 44 de la LEY y ii) la ENTIDAD cumplió con el procedimiento establecido por artículo 145 del REGLAMENTO para declarar la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02. De lo expuesto, la Primera pretensión principal y su accesoria, devienen en infundadas.

Segundo punto controvertido y accesorio

Determinar si corresponde ordenar la ampliación de plazo para la presentación de la conformidad del servicio.

Accesoriamente, determinar si corresponde o no ordenar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín el pago a favor de Soluciones Integrales L&J S.A.C. de los gastos generales, los mismos que serán calculados en la culminación del servicio.

66. Una vez determinado que no corresponde la nulidad de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJDRTC/DR, de fecha 29 de mayo de 2020, que a su vez declara, la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, cabe precisar cuáles son los efectos de esta.



67. La consecuencia de la nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02 es la invalidez de los actos celebrados que hayan incumplido los requisitos impuestos por la normativa; por tanto, los actos se tendrán como inexistentes e incapaces de producir efectos y, en consecuencia, la inexigibilidad de las obligaciones previstas en los CONTRATOS Nos. 01 y 02.
68. En conclusión, no hay relación contractual entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD, no hay obligación de presentar conformidad, no existe plazo pasible de ampliación y no existe obligación de pago derivados de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, por lo tanto, se deben declarar infundadas la Segunda pretensión principal y su accesoria.

Tercer punto controvertido

Determinar si corresponde o no ordenar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín el pago a favor de Soluciones Integrales L&J S.A.C. de una indemnización por daños y perjuicios por la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/ 100 Soles).

69. Para la configuración de la responsabilidad civil por daños y perjuicios, aducida por el CONTRATISTA, se requiere analizar la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño.
70. A este respecto, de la revisión de los argumentos del peticionante, el CONTRATISTA no ha desarrollado los elementos de la responsabilidad civil para solicitarla, así como tampoco sustenta el monto de S/. 50,000.00 en daños.
71. Sin embargo, el CONTRATISTA menciona que el hecho generador de los daños y perjuicios producidos se dio por la declaración de nulidad de los CONTRATOS Nos. 01 y 02, a través de la Resolución Directoral Regional No. 0400-2020-GRJDRTC/DR.
72. Al respecto, como ya se ha pronunciado este Árbitro Único, la actuación de la ENTIDAD fue conforme a ley y se vio motivada en el incumplimiento de los requisitos estipulados por la Ley No. 27626, por parte del CONTRATISTA, para poder operar como empresa de intermediación laboral.
73. Por tanto, se debe declarar infundada la pretensión.



Cuarto punto controvertido

Determinar a quien corresponde asumir el pago y/o reembolso de los costos arbitrales generados en el presente proceso.

74. El numeral 1 del artículo 73° de la Ley de Arbitraje prescribe que:

"(...) el tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".

75. Al respecto, y no existiendo un acuerdo de las partes, este Árbitro Único considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73° antes citado, las partes tuvieron razones suficientes para litigar, dada la complejidad de la materia y los actuados en el presente caso, por lo que cada una deberá asumir, proporcionalmente, las costas y costos procesales irrogados.

76. En virtud de lo anterior, el Árbitro Único tiene en cuenta que el CONTRATISTA ha sido vencido, por lo que se le debe condenar a que asuma la totalidad de los costos del presente proceso, referidos exclusivamente a los honorarios del Árbitro Único y los servicios de la INSTITUCION ARBITRAL.

III. Decisión

Por las consideraciones expuestas, el Árbitro **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal, por los motivos antes expuestos.

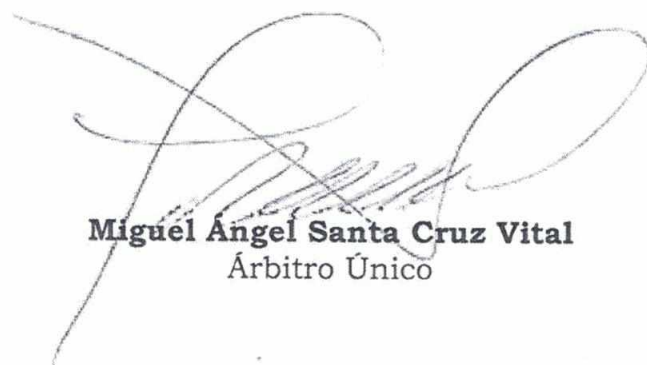
SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la pretensión subordinada a la primera pretensión principal, por los motivos antes expuestos.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal, por los motivos antes expuesto.



CUARTO: DISPONER que los costos incurridos por concepto de honorarios arbitrales y los servicios de la INSTITUCION ARBITRAL, sean asumidos íntegramente por el CONTRATISTA, por haber sido la parte vencida en este proceso. Fuera de esos conceptos, corresponde disponer que cada parte asuma directamente los otros gastos en los que incurrió como consecuencia del presente arbitraje.

Notifiquese a las partes conforme a ley. -



Miguel Ángel Santa Cruz Vital
Árbitro Único

PPR
DOC N° 2949715
EXP N° 3398309

Memorandum N° 888 - 2021-GRJ/PPR

A : ING. JOSÉ LUIS MEDINA ALIAGA
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información

ASUNTO : Remito información para registro en el Portal de Transparencia

REFERENCIA : Reporte Múltiple N° 20-2021-GRJ/GGR/ORDITI

FECHA : 13 de julio de 2021.



Me dirijo a usted, en virtud al documento de la referencia para informar a su despacho de que en el II trimestre del presente año se obtuvo Laudo Arbitral que contiene decisión favorable para el Gobierno Regional Junín al haber GANADO el proceso arbitral, teniendo en cuenta que la resolución del árbitro único Doctor. Miguel Ángel Santa Cruz Vital fue declarar INFUNDADAS todas las pretensiones invocadas por el demandante EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES L&J SAC; asimismo, dispuso que el pago de los costos incurridos por concepto de honorarios arbitrales y los servicios de la institucional arbitral **serán asumidas íntegramente por el contratista por haber sido la parte vencida, ahorrando y cautelando el patrimonio del Estado por el monto ascendente a S/. 219,000.00** (Doscientos diecinueve mil soles), conforme se evidencia de la notificación de la Orden Procesal N° 15, trasladada a esta parte con Carta N° 026-CA-002-2020 con fecha 06.05.2021 que contiene el Laudo Arbitral concerniente al Caso Arbitral N° 002-2020, arbitraje institucional desarrollado en la Unidad Arbitral Estudio López & Verde Abogados a mayor detalle adjunto el Informe N° 001 -2021-GRJ/PPR-EIVA elaborado por la profesional Erika Irene Vilchez Alhua - Abogada especialista en contrataciones con el Estado quien ejerció la defensa de los intereses de la entidad en el presente proceso arbitral y el laudo.

Concerniente a la emisión de actas de acuerdo total, es menester señalar que esta Procuraduría Pública Regional no ha realizado ningún acuerdo en vía de conciliación extrajudicial.

Atentamente,

Mg. WILMER E. MALDONADO GÓMEZ
C.A.J. N° 2852
PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e)
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Se adjunta:
Copia del Informe N° 001 -2021-GRJ/PPR-EIVA.
Copia del laudo arbitral- Orden Procesal N° 15.

C./ Archivo
WEMG/eiva

GOBIERNO REGIONAL JUNIN - ORDITI
PASE A: A. Malasque
PARA : Atención
FECHA: 14 JUL, 2021





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Doc.	04811335
Reg.	03320682



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 001 -2021-GRJ/PPR-EIVA



A : MG. WILMER EMILIO MALDONADO GOMEZ
Procurador Regional del Gobierno Regional Junín

DE : ERIKA IRENE VILCHEZ ALHUA
Abogada especialista en contrataciones con el Estado

ASUNTO : Remito informe detallado sobre notificación de laudo arbitral con decisión favorable para la entidad al haber ganado el proceso arbitral.

REFERENCIA : Notificación de la Orden Procesal N° 15 que contiene el Laudo Arbitral.

FECHA : 12 de mayo de 2021.

Por el presente es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia para informar respecto a la Notificación de la Orden Procesal N° 15, trasladada a esta parte con Carta N° 026-CA-002-2020 que contiene el Laudo Arbitral concerniente al Caso Arbitral N° 002-2020, arbitraje institucional desarrollado en la Unidad Arbitral Estudio López & Verde Abogados seguido con la EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES L&J SAC.

Al respecto, es menester resaltar que el Laudo Arbitral contiene decisión favorable para el Gobierno Regional Junín, teniendo en cuenta que la resolución del árbitro único Doctor. Miguel Ángel Santa Cruz Vital fue declarar INFUNDADAS todas las pretensiones invocadas por el demandante EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES L&J SAC; asimismo, dispuso que el pago de los costos incurridos por concepto de honorarios arbitrales y los servicios de la institucional arbitral serán asumidos íntegramente por el contratista por haber sido la parte vencida, ahorrando y cautelando el patrimonio del Estado por el monto ascendente a S/.219,000.00 (Doscientos diecinueve mil soles), pero lo más importante es **resaltar que la entidad ha actuado conforme a Ley al declarar nulos los contratos que habían sido suscritos entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín y la empresa**, por consiguiente nunca se configuró favorecimiento para empresa, afirmación que fue sostenida por los medios de comunicación ante la generación de las ordenes de servicio. La decisión del árbitro único textualmente indica lo siguiente:

"PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal, por los motivos antes expuestos.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal, por los motivos antes expuestos.

CUARTO: DISPONER que los costos incurridos por concepto de honorarios arbitrales y los servicios de la institución arbitral, sean asumidos íntegramente por el CONTRATISTA, por haber sido la parte vencida en este proceso".





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

A mayor abundamiento a continuación detallaré el desarrollo del proceso arbitral seguido con la EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES L&G SAC, el motivo de la controversia se genera a causa de la suscripción de los dos (02) contratos entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín y la empresa, los contratos tienen las siguientes denominaciones: "Contrato N° 01-2020-GRJ-DRTC-DR respecto al "SERVICIO DE PERSONAL PARA FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN JUNÍN" celebrado con fecha 28.04.2020 y "Contrato N° 02-2020-GRJ-DRTC-DR respecto al "SERVICIO DE PERSONAL POR AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA PARA FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN JUNÍN" celebrado con fecha 11.05.2021. Ambos contratos se encuentran vinculados al método de contratación directa.

Las pretensiones de la EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES L&G SAC, fueron las siguientes: a) que se declare la NULIDAD de la Resolución Directoral Regional N° 0400-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 29.05.2020, b) Obligación de dar suma de dinero respecto al cumplimiento del servicios derivado del contrato N° 001-2020, ascendiente a S/ 140, 000.00 soles, c) Indemnización por daños y perjuicios ascendiente a la suma de S/. 50,00.00 soles y d) pago de costas y costos del proceso por la suma de S/.20,00.00 soles, así como el pago de los honorarios arbitrales por S/ 4,500.00 soles y gastos administrativos por S/ 4,500.00 soles. Haciendo un total de S/.219,000.00 (Diecinueve mil soles).

La defensa ejercida estuvo enfocada en prevalecer la NULIDAD DE OFICIO declarada con Resolución Directoral Regional N° 400-2020-DRTC de fecha 29 de mayo de 2020 efectuada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín en virtud a la posibilidad de que tiene la Administración para declarar la nulidad de oficio de sus propios actos administrativos, esta potestad es consagrada por el artículo 202° numeral 37 de la LPAG a regular la revisión de los actos en sede administrativa que se puede promover ya sea de oficio por decisión de la propia entidad, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agraven el interés público en razones de oportunidad, mérito o conveniencia por causa de interés público; asimismo se resaltó en el control posterior realizado por el Órgano de Contrataciones con el estado en el que se evidencia la no presentación del documento esencial para las contrataciones que es REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN LABORAL (RENEEIL) en virtud a que la empresa iba a contratar a personas para realizar el servicios de fiscalización; por lo tanto tendría que cautelar adecuadamente los derechos de los mismos y brindarles la protección necesaria e instrumentos para la ejecución del servicio teniendo en cuenta el tipo del de proceso que es contratación directa de conformidad con el art 27° de la Ley de contrataciones del estado, Ley 30225. Sobre la pretensión del pago de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS se sustentó que la demanda adolecía de los hechos que generaron el daño cuya indemnización se solicita, siendo así que la empresa no pudo demostrar: la conducta antijurídica, el factor de atribución, no se ha establecido el nexo causal determinante del hecho y supuestamente el daño producido y finalmente no identificó las consecuencias que hubieran generado el posible daño. En consecuencia esta defensa demostró la legalidad de la Resolución Directoral Regional N° 400-2020, alegando que se cumplió con solicitar oportunamente a la empresa la subsanación de la observación con la finalidad de que presente el RENEEIL el mismo que es una disposición legal, finalmente respecto a la pretensión de PAGO DE LAS SOBRE LOS COSTOS ARBITRALES, se mantuvo la posición de la evidente la transgresión al principio de veracidad por parte de la empresa de los argumentos manifestados como son la afirmación de haber ejecutado el servicio ya que la empresa no acreditó sus afirmaciones del servicio aparentemente prestado con ningún elemento probatorio tales como fotos, videos, o algún documento en el que haya solicitado la conformidad al área usuraria adjuntado el informe del desarrollo de los servicios.

Los argumentos descritos fueron expuestos en la *audiencia de alegatos finales* desarrollada el día 12 de marzo de 2021, cumpliendo con enfocar mi participación en la defensa legal de la entidad, incidiendo en que las pretensiones





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

invocadas por la Empresa Soluciones L&J deben ser declaradas INFUNDADAS en todos sus extremos al haberse demostrado la legalidad de la resolución que declara la nulidad de los contratos y que la empresa no ha ejecutado los servicios tratando de hacer exigible un derecho que no le accede.

En conclusión, se ha cumplido con el objetivo que tiene la Procuraduría Pública Regional de cautelar y defender los intereses del Estado, prevaleciendo los actos administrativos realizados en su oportunidad por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín, en tal sentido adjunto el laudo arbitral con decisión favorable para la entidad al haber ganado el proceso arbitral.

ABG. ERIKA IRENE VILCHEZ ALHUA
ABOGADA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CAJ N° 5284

